

CONSTANCIA: A Despacho del señor Juez, para resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante. Sírvasse proveer. Santiago de Cali, 20 de octubre de 2021.

ANGELA MARIA LIBREROS TORRES.  
SECRETARIA.

AUTO INTERLOCUTORIO No.887 UNICA INSTANCIA.  
JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD.  
SANTIAGO DE CALI, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.  
RAD.10-2021-00438-00.

OBJETO DE LA DECISIÓN:

Ha pasado al Despacho la presente demanda: DECLARATIVA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, adelantada por: ANDRÉS FELIPE AMARILES DÍAZ, a través de apoderado judicial, contra: MARLENY ANGULO AGUIRRE y GLORIA LIEVANO DE BERNAL, a fin de resolver el recurso de REPOSICIÓN, formulado por la parte actora, contra el auto interlocutorio No.725 del 10 de septiembre de 2021, notificado por estado el 15 de septiembre de 2021, mediante el cual, se rechazó la demanda, por las razones allí expuestas.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Fundamenta el recurso el memorialista, en síntesis, señalando que:

- ✓ La decisión en comento se estructura como una decisión que configura un excesivo ritual manifiesto que trunca el acceso a la administración de justicia y en lo absoluto garantiza ni permite la materialización del derecho sustancial, el cual prevalece sobre el formal o procedimental.
- ✓ Que lo que se procura es la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual en que incurrieron las demandadas, evento que fue detallado en el citado derecho de postulación y por ende en el libelo genitor, donde se indicó de manera palmaria el tipo, clase y naturaleza de esta demanda, como también mencionó contra quienes está dirigida, que aunado a ello, los vehículos que con tanto énfasis se extrañan en el poder reprochado, no son en lo absoluto el objeto del litigio aquí pretendido, ya que aquí no se debate el dominio o algún derecho real sobre esto.
- ✓ Que las pretensiones son el sustento de toda demanda; a través de ellas se ejerce el derecho de acción en concreto y en atención a la rama del derecho sustancial a que pertenece, y que, aunado a ello, la pretensión declarativa tiene por objeto solicitar una sentencia en la que se predique la existencia o inexistencia de determinada relación jurídica respecto de la cual hay incertidumbre, y por ello, el rechazo constituye un exceso ritual manifiesto que cercena su derecho sustancial.
- ✓ Que el Decreto 806 de 2020 es una reglamentación que persigue la facilidad de la administración de justicia a partir de los medios digitales, pero su contenido material, a pesar de contener normas de orden procesal, no tiene el alcance suficiente para predicarse como normas de orden público cuyo incumplimiento desencadene la restricción del acceso a la justicia por tecnicismos prácticos, endilgando que, si bien la dirección indicada en el poder no coincide con lo reseñado en el correo electrónico de subsanación, esto no se

convierte en una causal de inadmisión y subsecuente rechazo, pues tal disposición no se erige como una formalidad de la demanda ni como alguna otra causal de inadmisión.

✓ Por ultimo sostiene que, la ausencia de la enunciación de las placas no puede convertirse en una circunstancia cuya ausencia cercene la posibilidad de que se conozca en la jurisdicción un tema plenamente determinado en el poder, precisando que, desde tiempo atrás se revocó el poder conferido al apoderado judicial, de manera que las deficiencias aludidas no tienen el alcance para invalidar la promoción del presente proceso.

Por lo anterior, solicita la reposición del auto atacado, y se proceda con la admisión de la demanda.

#### TRAMITE PROCESAL:

Presentado oportunamente el recurso de reposición, se le dará trámite de plano, por cuanto, no se ha trabado la Litis.

Así las cosas, procede esta Agencia Judicial a dirimir el objeto de la presente decisión, previas las siguientes,

#### CONSIDERACIONES:

El recurso de reposición tiene como finalidad que, el mismo juez que profiere determinada providencia, la revoque o reforme, atendiendo los argumentos que esgrima el recurrente o persona inconforme con la decisión adoptada por el Juzgado.

Ahora bien, descendiendo al caso en concreto, delantadamente debe decirse que no se revocará la providencia atacada, por cuanto:

i) Esta Agencia Judicial, en observancia de la normas procesales, conforme a lo previsto en el Art.13 del C.G.P., procedió a la revisión de la demanda que hoy llama la atención, detectándose que la misma presentaba deficiencias, las cuales fueron advertidas en auto No.632 del 31 de agosto de 2021, donde se indicó de forma clara, precisa y expresa, que el poder era insuficiente, por cuanto no atendían las exigencias contempladas en los incisos 1º y 2º del art.82 *ibídem* (requisitos de la demanda) y lo dispuesto en el Art.5 del Decreto 806 de 2020, además de no aportar debidamente actualizado los certificados de tradición de los automotores objeto de la Litis, contenido en el num.3 del Art.84 del C.G.P., y no determinar la cuantía, con fundamento en el numeral 9º del Art.82 C.G.P., concordante con el Art.26 *ibídem*, yerros que no fueron subsanados conforme la normatividad procesal vigente.

Bajo ese contexto, en su momento procesal oportuno, a través de apoderado judicial de la parte actora presentó dentro del término, escrito de subsanación, a fin de corregir las anomalías antes descritas, evidenciándose notoriamente que, algunos yerros mencionados en el auto de inadmisión persistían, lo que conllevó a la causal de rechazo de la demanda, en atención a lo previsto en el Art.90 del C.G.P., pues no se corrigieron los defectos en comento.

ii) En primer lugar, es menester señalar que el legislador estableció como mecanismo de control de la demanda, un catálogo de requisitos formales que toda petición de esa estirpe debe contener para acceder a la administración de justicia, máxime cuando se actúa por intermedio de un profesional del derecho, requisitos que deben cumplirse para que proceda su admisión.

iii) En esa tónica, es preciso indicar que, el objeto de los procedimientos, no es nada más ni nada menos, que la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, garantizándose el debido proceso, por consiguiente, al establecerse parámetros y/o exigencias que debe reunir toda demanda, a fin de que la misma se ajuste al ritual pertinente, acarrea una revisión detenida de esta (control de legalidad), para que así, no se presenten futuros inconvenientes al respecto, siendo necesario avizorar tempranamente las falencias correspondientes, para lograr el goce real del derecho material, es decir que, el derecho procesal es el instrumento necesario para hacer eficaz el derecho sustancial, de ahí que, los requisitos que se le exigieron a la parte ejecutante, tienen el propósito de que las pretensiones sean claras, acordes y congruentes con el objeto de la Litis y el poder otorgado, acatándose lo dispuesto en el Inc.3 del Art.74 del C.G.P., en concordancia con lo dispuesto en el num.8 del Art.82 del C.G.P., pues el apoderamiento es un acto solemne, el cual exige de rodearlo de formalidades necesarias y útiles, que deben cumplirse por estar establecidas en la Ley, aunque parezcan odiosas, pues bien al estatuirse que “...*en los poderes especiales los asuntos deberán estar debidamente determinados y claramente identificados...*”, advierte la disposición que dicha exigencia, el asunto debe estar debidamente señalado con tal precisión, que no se confundan con otros, para evitar que el apoderado actué en otros procesos para los cuales no ha sido designado, de ahí que, debía identificar los vehículos objeto de la Litis, pues de ello se deriva, el asunto el cual le fue otorgado, aunado a que ni siquiera cumplió lo dispuesto en el Art.5 del Decreto 806 de 2020.

iv) En ese orden de ideas, se colige que el rechazo de la demanda, no es un capricho de este Juzgador, ni mucho menos se está obstruyendo el acceso a la justicia, por el contrario, se está acatando las normas procesales, las cuales son de orden público y, por consiguiente de obligatorio cumplimiento, máxime, cuando el Art.228 de la Constitución Política, prevé en su parte final que: “...*Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado...*”<sup>1</sup>, razón por la cual, en ningún momento este Despacho Judicial, desatendió la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, pues se itera, las deficiencias que presentaba la demanda, fueron advertidas y/o avizadas en el momento procesal oportuno, las cuales no fueron subsanadas adecuadamente por la parte ejecutante, acreditándose que no fue diligente al respecto.

v) Así las cosas, debe decirse que, en cada decisión judicial proferida en el caso en particular, no se vislumbra un exceso ritual manifiesto, donde se demuestre la inobservancia del derecho sustancial, el cual se determina por “...*el contenido, la materia, la sustancia, esto es, la finalidad de la actividad o función jurisdiccional...*”, por lo tanto, el derecho procesal, es: “...*un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho...*”<sup>2</sup> (Parte en negrilla fuera del texto original).

vi) En compendio, al encontrarse que, en efecto, la demanda no fue debidamente subsanada, se advierte que el recurso interpuesto no tiene vocación de prosperidad, toda vez que el rechazo de la demanda era procedente y no se ajustaba a lo dispuesto en las normas procesales conforme al Inc.3 del Art.74 del C.G.P., aunado a ello, no dio cumplimiento a lo preceptuado en el Art.5 Inc.2 del Decreto 806 de 2020, pues lo pretendido debe gozar de claridad al respecto, para así garantizar el derecho sustancial y el debido proceso.

vii) Finalmente es menester advertir que no tiene cabida alguna lo manifestado por el actor, al endilgar que desde tiempo atrás había revocado el poder conferido al apoderado judicial,

<sup>1</sup>.

<sup>2</sup> Corte Constitucional - Sentencia No. C-029/95.

Demandante: Andrés Felipe Amariles Díaz.  
Demandadas: Marleny Angulo Aguirre y Gloria Lievano De Bernal.

pues el auto de rechazo fue notificado en estado No.151 de fecha 15 de septiembre de 2021, y el memorial el cual revocaba poder fue presentado el día 16 de septiembre de 2021, es decir, posterior al auto notificado.

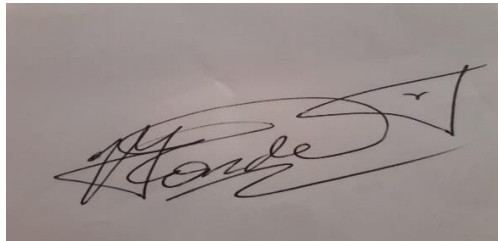
Conforme a las anteriores consideraciones, el Juzgado,

RESUELVE:

NO REVOCAR, lo dispuesto en el Auto Interlocutorio No.725 del 10 de septiembre de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE.

EL JUEZ,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Conde", is written over a faint, stylized graphic that resembles a triangle or a stylized letter 'A'.

VICTOR GUILLERMO CONDE TAMAYO.

3.-

FECHA:25 OCTUBRE 2021  
ESTADO No.178